

I.- POR LA REFUNDACIÓN DE IU EN EL MARCO DE LA UNIDAD POPULAR

1.-Por un debate abierto y participativo

Hace varias semanas, los medios de comunicación se hicieron eco de una importante noticia: “Alberto Garzón quiere crear un nuevo partido sin las siglas de IU”... Según esta noticia, “La intención de Garzón y de una parte de los dirigentes de la formación es fundar un partido completamente nuevo que rompa con una dirección y unas estructuras que, entienden, lastran su proyecto político”... Señala la noticia “fuentes de la máxima cercanía con el candidato han señalado a este periódico que “hace falta construir una herramienta superadora, una nueva organización”, cuya forma jurídica será “un partido político, como movimiento político y social” (1)

Objetivamente hablando, con un resultado electoral de dos diputados, IU está en una situación crítica. IU viene arrastrando una crisis de identidad política desde hace años que la va consumiendo y desgastando progresivamente, distanciándola de su base social y de los movimientos sociales. Un día define al PSOE como una de las caras del bipartidismo que sostiene las políticas neoliberales de la Troika y otro día pacta con este partido el gobierno de coalición en Andalucía permitiendo que le ridiculicen y le ninguneen en la gestión de ese gobierno... IU ha perdido casi toda su capacidad de elaboración colectiva. Su diversidad y pluralidad ideológicas y políticas han quedado mermadas, dando paso a un dominio casi de monopolio de los aparatos del PCE en su interior. Y su militancia ha decaído en número y en participación, con asambleas muy disminuidas en comparación con la de los años 90... Para colofón, su estrategia y táctica en los dos últimos años respecto a las confluencias con otras formaciones y sectores, ha estado plagada de desaciertos (no achacables sólo a sus decisiones) y eso la ha dejado bastante aislada socialmente...

Hace casi una década estos problemas comenzaron a manifestarse y ya en 2008 Julio Anguita propuso la iniciativa de “Refundación de IU”, que fue aprobada nominalmente en instancias de IU y PCE, sin llegar a aplicarse ninguno de sus planteamientos... Julio ha venido a decir, tras las elecciones del 20 D: “...Los datos de IU son, por desgracia, los esperados. Ni siquiera una campaña tan limpia, tan llena de contenidos y tan honesta como la de Garzón y muchos de sus compañeros y compañeras, podía evitar lo que IU llevaba escrito en su genoma desde que, ha tiempo, renunciara a ser ella misma e independiente de cualquier otra fuerza política o sindical. El propio Garzón lo ha descrito perfectamente cuando ha dicho que IU ha carecido de ambición política. Lo peor que pudiera pasar es que se encerrase en la búsqueda de “culpables” ajenos a ella misma. Si Némesis y las Furias obcecán su inteligencia, borran su memoria, impiden hacer lo que debió hacer más de una década y la instalan en el maya del victimismo, IU quedará como el sinónimo de un fracaso labrado por propias manos. Corresponde a Garzón, el activo más importante, con más capacidad y valía – y si puede – la tarea de detener y reinvertir el sentido de un proceso de extinción...”

Con estos datos y estas reflexiones, para IU es necesario acometer un debate en profundidad con el objetivo de reformular las bases teóricas y prácticas, las tácticas y las estrategias, los programas y referencias ideológicas, los métodos de trabajo y las características organizativas de la izquierda transformadora en este país. Partiendo de toda la experiencia y trayectoria, medios humanos y materiales, todo el acervo del colectivo humano de IU y del PCE... Pero generando un proyecto distinto que supere las ataduras, limitaciones, sesgos y vicios burocráticos de la actual IU... Abriéndose más a la sociedad y a la participación, a la diversidad cultural de la izquierda... No vale enrocarse más. Hay que abrir las puertas al debate ya: Alberto Garzón lo ha manifestado con claridad: llama a "repensar" la izquierda "sin miedo" y convoca al debate a "todo el mundo que se sienta de izquierdas" "Todo está abierto para que la gente opine"

2.-Tres medidas para dar comienzo con credibilidad

2.1.- Asumir la realidad y analizar sus causas

Es necesario asumir esta realidad bastante dura de sólo dos diputados, en un contexto previo de aislamiento político y dificultad para conseguir una confluencia de formaciones y movimientos e izquierdas. Decir "no es el momento de exigir responsabilidades" es huir de esa realidad.

Dejando a un lado la "competitividad" de espacios con Podemos, alguien tendrá que decir qué pasó para que aquella ocasión en la que Pablo Iglesias formuló a IU una propuesta de acción común, iniciada con unas primarias, quedara en un desplante por parte de la dirección de IU, despreciando incluso el sistema de primarias.

Alguien tendrá que decir cuáles fueron las causas que motivaron que personas como Ramón Luque y Lara Hernández dimitieran de sus responsabilidades, que afectaban tanto a la comunicación electoral como a la convergencia de IU. Pues lo que se pudo leer en declaraciones es que dirigentes como Wily Meyer, Centella y otros habían tomado las riendas del entorno del candidato Alberto Garzón...

Pero, sobre todo, es imprescindible que se explique el proceso de degradación, deterioro y desnaturalización de IU... ¿Por qué aquella propuesta de Julio Anguita de "Refundación de IU" realizada en 2008, aprobada en ámbitos de IU y PCE no llegó a aplicarse, quiénes la bloquearon?... ¿Por qué la elaboración colectiva de programas y alternativas quedó reducida a la mínima expresión? ¿Por qué la pluralidad política y la diversidad ideológica de IU desaparecieron, dando paso a un dominio fáctico de las direcciones del PCE?... ¿Por qué un Congreso del PCE que aprobó una estrategia llamada "El PCE de IU" fue sustituido en la práctica, y años después por otro Congreso, consistente en formalizar "la IU del PCE"? ¿Qué dirigentes fueron los valedores de este cambio de estrategia que terminó arruinando IU?... ¿Por qué, cada vez más, resulta tan difícil abrir espacios de críticas y argumentos que se confronten a estas prácticas de las direcciones, y la "cultura de la disciplina" acabe nominando como "traidores" a quienes disientan y terminen excluyéndolos?... ¿Por qué el 15M no

fue tenido presente en los análisis políticos como un síntoma claro de un cambio de ciclo?... ¿Nadie es responsable de todo esto?...

2.2.- Dimisión de dirigentes y responsables

Nada sería creíble de un proceso de refundación o regeneración si los responsables directos de la situación de crisis al más alto nivel no comenzaran poniendo sus cargos a disposición de la organización y de la ciudadanía... Puede parecer inverosímil, pero es verdad: en Andalucía, tras las elecciones autonómicas, con un resultado bastante desfavorable, la dirección responsable de ese fracaso electoral continúa como si tal; nadie se ha hecho autocrítica y, como si fuera una ficción absurda, hasta el portavoz parlamentario que, en la anterior legislatura, votó tres veces en contra de la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación... ahora representa a IU en esa comisión de investigación, creada por fin esta legislatura... gracias a otros grupos, claro.

La dimisión es necesaria, imprescindible, después de las elecciones generales si es que se repiten en mayo. El fracaso electoral ha sido el culmen de un proceso lleno de desaciertos y empecinamientos, con muchos compañeros y compañeras excluidos en el camino... y un proyecto en vías de extinción... Mirar para el techo argumentando que lo pasado pasó y que "hay que centrarse en el futuro", es ignorar premeditadamente las causas y, en consecuencias, invalidarse para aplicar soluciones de cara al futuro.

Ya en 2008, en la propuesta de refundación de IU, se proponía, la dimisión inmediata de al menos el 50% de los cargos de responsabilidad a todos los niveles y, en el plazo de un año, un 25% de esa mitad restante... Obviamente, dichas propuestas, a pesar de suscitar un amplio apoyo y consenso, se difuminaron en su redacción para que al final su materialización quedara en una declaración de intenciones sin ninguna medida concreta a realizar.

2.3.-Convocatoria abierta para la constitución de una nueva formación

Porque el objetivo estratégico es recuperar la capacidad de intervenir social y políticamente, en la nueva situación, con un instrumento adecuado, fruto de un debate colectivo. Ese debiera ser el resultante de la próxima Asamblea: la apertura de un nuevo proceso de expansión y reconstitución de la izquierda transformadora.

Se trata, pues, de realizar una Convocatoria pública, abierta, dirigida a todos los movimientos sociales, fuerzas políticas y personas de los ámbitos de las izquierdas para crear una nueva fuerza política que, partiendo de la militancia, experiencias y recursos del PCE e IU, sea capaz de sentar las bases de un movimiento político social más amplio que realmente pueda articular una Unidad Popular como la que venimos proponiendo en esta fase inicial.

La próxima Asamblea debiera aprobar esta resolución y, para llevar a cabo dicha convocatoria con el máximo de garantías y de credibilidad, nombrar una gestora plural, paritaria, en la que no estén personas de la dirección responsables de la actual situación política por la que atraviesa IU

3.-Partir de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestra trayectoria

Muchos comentarios suscitó las exigencias que se hicieron a IU que dejase su “mochila” y se incorporase a una confluencia global. Estábamos en plena expectativa ante la posibilidad de una alternativa unitaria de las formaciones y movimientos de izquierdas, con la participación efectiva de Podemos, IU, Equo... Pero esa iniciativa “prodigiosa” fue abortada por cruzadas irresponsabilidades quedando, eso sí, la palabra “mochila” como “factor determinante” que impedía el entendimiento de cara al futuro...

“La mochila de IU” fue objeto de diversas interpretaciones y, en esencia, quienes despotricaban de ella, venían a referirse al conjunto de personas y actitudes que, instaladas en los aparatos de poder interno, determinaban una identidad y un perfil más próximos a la “burocracia partidocrática” que a la calle, más cercana a la verticalidad en las decisiones que a la participación colectiva, más inclinada a la prolongación interminable de los cargos que a la renovación...

Pero la “mochila” no es un “artefacto externo” que IU lleva sobre sus espaldas y que podemos deprendernos de ella cuando lo deseemos. La mochila vital de IU comprende el conjunto “genético” –eso que se llama el ADN de IU-, de aprendizajes y de influencias sociales e históricas, así como la propia experiencia vivida en una trayectoria empeñada en la lucha contra las desigualdades, por las libertades públicas y por los derechos sociales, por la emancipación de las personas y de los pueblos. En definitiva, en un proceso de confluencia o unitario, se trata de asumir las identidades de cada cual y la de todos. Es el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad.

4.-Construir la alternativa respetando nuestra pluralidad interna. Recuperar nuestro perfil de movimiento político y social

IU comenzó siendo una coalición de partidos, con un logotipo (sopa de siglas) en el que figuraban varios símbolos diminutos de cada fuerza política integrante. Pero el “método de trabajo”, impulsado en Andalucía desde Convocatoria, consistente en la llamada elaboración colectiva, introdujo una dinámica transversal, participativa y alternativa, que desbordó el esquema de coalición con “Comisiones Políticas” donde estaban los “secretarios generales” de cada partido y poco más... Aparecieron los Consejos en vez de las comisiones, con representaciones de los territorios, de las fuerzas políticas integrantes y de las áreas de elaboración colectiva...

Estábamos construyendo un movimiento político social organizado, plural política e ideológicamente, basado en la participación y en la construcción de la triple alternativa: alternativa de gobierno, alternativa de estado y alternativa de sociedad. Era un proyecto nuevo, con nuevas formas de hacer política, descentralizado, con soberanía en sus asambleas, conectado con los movimientos sociales, utópico en sus planteamientos globales y muy pragmático en la aplicación concreta de las medidas consensuadas... Este proyecto, fue liderado por Julio Anguita, compañero de

trayectoria política intachable, honesto e imbuido de rigor histórico en sus planteamientos, pedagógico en sus exposiciones y de oratoria eficaz.

El proyecto de IU, como movimiento político y social plural y participativo, permitió la supervivencia del PCE tras su hecatombe del 82, incluso tras la caída del muro de Berlín -que provocó en otros partidos crisis muy graves y hasta su disolución-. Pero pronto, determinados dirigentes del PCA que ya en un principio concibieron IU como una simple máscara electoral o una tabla salvavidas, mostraron serias reticencias al desarrollo de IU. No apoyaron en absoluto la elaboración colectiva, cercenando sus trabajos y los medios para su desarrollo. Fueron progresivamente mermando la pluralidad interna valiéndose de mayorías mecánicas y de la eliminación del consenso al considerarlo “elemento retardatario”...

Efectivamente, siendo Julio Anguita secretario general del PCE se aprobó en el XIII Congreso una estrategia denominada “El PCE de IU” donde se establecía la plena transferencia de soberanía institucional y social del PCE hacia IU... Era la apuesta más firme y coherente en aras de la defensa de un proyecto plural con identidad propia. Intentaba apartar la tentación existente en algunos ámbitos del PCE de constituirse en una especie de “grupo de presión interno” que, con reuniones paralelas previas y aprovechando mayorías mecánicas, se apropiase primero de las direcciones, después de la totalidad del proyecto...

Pero poco tiempo después, con otros dirigentes del PCE, conocidos por todos, aquella propuesta estratégica del “PCE de IU” fue permutada por la de “la IU del PCE”... Y progresivamente se fue viendo el desgaste, el agotamiento, el estancamiento de IU... Y quedaron reducidas, prácticamente aniquiladas, las dos señas de identidad de IU, que ninguna otra fuerza política tenía: la pluralidad política e ideológica y la elaboración colectiva... IU se convirtió así en un partido clásico, a imagen y semejanza del PCE... Y en esas estamos desde hace varios años, en pendiente de descenso social, desconectados de la realidad, con escasa capacidad alternativa, con el rumbo perdido, más pendientes de tácticas y pactos que de nuestro propio programa, de nuestro desarrollo y extensión...

“...en IU conviven al menos tres almas o pulsiones. De un lado hay un alma ortodoxa y maximalista en lo retórico que anda agarrada siempre al palo de la bandera para que no se la lleve el viento de la historia. De otro lado IU tiene un alma pragmática enredada en el cabildeo institucional que cifra todas sus expectativas en ser la fuerza complementaria que tire del PSOE a la izquierda...”

“...Tratando de abrirse hueco entre estas dos almas hay una Izquierda Unida dispuesta a llegar a pactos programáticos pero con vocación de alternativa, y que en su día trató de responder a las aspiraciones históricas de la izquierda abriéndose a nuevas formas de organización y lucha. La nueva coyuntura que se abre puede servir de terapia para que IU resuelva sus problemas de personalidad múltiple en beneficio de esta tercera cultura política, ahora que el despunte de lo nuevo no deja lugar a las nostalgias y la crisis del bipartidismo dinástico no aconseja comprometerse con cualquiera de sus caras, sino que insta a oponerle una alternativa constituyente para la que IU ya no se basta...” **Texto del artículo del profesor Juan Andrade, Profesor de*

Las características de este movimiento político y social transformador

En este proceso de recomposición y refundación de la izquierda transformadora, ha de abrirse como síntesis superadora esta tercera concepción, la originaria de IU, como movimiento político y social plural y participativo, espacio de encuentro, debate y acción de la diversidad social y política, con una organización democrática radical, flexible, descentralizada, confederal y asamblearia, que tiene a la elaboración colectiva de programas y alternativas como factor de cohesión, basado en ese vínculo que da la participación y la movilización en conexión con los movimientos sociales... Que se comunica de forma abierta y transversal con la sociedad civil, y que tiene la ética y la transparencia como base de su cultura cotidiana...

Y que, en lo interno, es transversal y participativa, igualitaria, rotatoria en la asignación de responsabilidades, con limitación en la duración en los cargos de dirección o responsabilidad institucional... Una organización cuyos adscritos, con el grado de compromiso que cada cual en función de su realidad pueda tener, gozan de los derechos de información y participación, y están sujetos orgánicamente a los deberes y obligaciones que colectivamente se decidan, con el derecho a ser informados y oídos, a defenderse y a recurrir cualquier decisión que les afecten personalmente.

El movimiento social y político que intentamos reconstruir, sea una IU refundada o una Unidad Popular recompuesta, ha de partir, igualmente de los principios y valores de la izquierda transformadora, anticapitalista, feminista, ecologista, vinculada a los movimientos de liberación y a la lucha de clases, implicada en los conflictos sociales y en la lucha por superar las diferencias sociales y los desequilibrios territoriales...

Por ello, desde un principio, ha de sostenerse y llevar a la práctica en la construcción de este movimiento político y social un respeto estratégico a la pluralidad política e ideológica y a su diversidad social, a la confluencia de opciones y visiones distintas en el campo de la izquierda y a la participación mediante el sistema de consultas y de primarias a los efectos de la elecciones que hayan de realizarse en los procesos electorales o internos. Con un sistema claro de incompatibilidades de cargos y responsabilidades que impidan ostentar puestos de dirección en este movimiento político y social a quienes tengan igualmente puestos de alta responsabilidad en otras formaciones o colectivos integrantes o no del mismo....

Y, sobre todo, hay que configurar este movimiento político y social como un espacio para el debate y la acción política plenamente soberano. La soberanía de este movimiento político y social implica la aceptación por todos sus componentes de las decisiones democráticas emanadas en el mismo. Soberanía en cada ámbito territorial o sectorial. Soberanía que supone la transferencia de su propia soberanía, por parte de las formaciones políticas, partidos, colectivos sociales o grupos diversos integrantes. Transferencia de la interlocución social, de la representación institucional, de los recursos

NOTAS:

- (1) http://politica.elpais.com/.../actuali.../1451666587_018444.html
- (2) <http://www.efe.com/.../garzon-no-ve-motivos-par.../10002-2795662>
- (3) <http://www.mientrastanto.org/.../no-hay-tiempo-para-mas-dilac...>
- (4) <http://larepublica.es/.../.../26/julio-anguita-el-maya-del-20d/...>
- (5) <http://www.ecorepublicano.es/.../alberto-garzon-desmiente-que...>
- (6) <http://www.eldiario.es/.../Alberto-Garzon-repensar-izquierda-...>
(http://politica.elpais.com/politica/2016/01/08/actualidad/1452286768_027526.html)...
(<http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article98670>)

II.-UNA CRISIS GLOBAL Y ESTRUCTURAL. Un cambio político y social. (*)

Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial.

Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No es una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.

Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

Desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

En un artículo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre de 2015 se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá.

Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que **ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.**

Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.

El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue Secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”.

Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. **La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos.** Estos fueron, por esta razón, años de conmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países,

donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

Así se inició lo que Paul Krugman ha llamado **“la gran divergencia”**, el proceso por el cual se produjo **un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás**. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titulaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0'1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (...) o ganan el dinero en las finanzas”.

Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo

que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatir las, sobre todo en el terreno de la educación.

El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuaran con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. **El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación**”.

Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la actuación constante de **los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.**

¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año

pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos.

Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18'5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida.

Como ha dicho Stiglitz **"Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos.** En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es **la desregulación de las leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial.** Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario).

Una desindustrialización semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (...), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una considerable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengán a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta **Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”.** ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede

referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.

Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

“Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (...) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo

remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (...) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (...). Una crisis de la deuda permite a la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

Este comienza a ser también **el caso de España**, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. **Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más**”. Y ello, añade, “**para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña**”.

Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización

impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aquí a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: **“Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (...). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”**. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses

inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemente una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos para los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

“En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una estrecha observación de los acontecimientos”.

La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la

derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres... En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente como para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesto panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (...) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama **“la transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (...) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”**. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. **El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros”** (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray

sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por sí sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero.

Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.

Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. **Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.**

¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentemente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en

todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resignamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalismo depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.

()Textos recogidos de la Conferencia del Profesor Josep Fontana. “Más allá de la crisis (*)Lunes, 6 de Febrero de 2012*

<https://marxismocritico.com/2012/02/07/la-gran-divergenciaconferencia-de-josep-fontana/>

<https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/02/mas-all3a1-de-la-crisis-j-fontana-3-de-febr-2012.pdf>

III. Una organización por el socialismo y la Ruptura Democrática

Ante la arremetida de las élites económicas contra la clase trabajadora y las capas populares del conjunto del Estado español es necesaria una organización anticapitalista, que vuelque sus energías en la revitalización de la resistencia social contra los ajustes y que impulse una movilización sostenida que desemboque en la derrota de la oligarquía.

En la coyuntura actual, el proyecto de reforma oligárquica del Régimen del 78 puesto en marcha por las élites debe ser combatido con toda firmeza, desde la defensa de la Ruptura Democrática con el Régimen, y por la apertura de un proceso constituyente en el que los pueblos del Estado español aseguren el fin de los ataques contra las mayorías sociales y el inicio de la transformación socialista de la sociedad.

El espacio político que debe ocupar nuestra organización es el de una izquierda anticapitalista, socialista y no keynesiana; rupturista y no apegada a la cultura política de la Transición; audaz y no timorata; volcada en las luchas y no voluntaria gestora de recortes.

Una organización comprometida con su pueblo y contraria a cogobiernos junto a los amigos de las élites

Una organización socialista como la que necesitamos debe, de forma clara, delimitar los campos políticos, entre las muy diferentes fuerzas políticas defensoras de las élites económicas y del sistema capitalista (PP, PSOE, Ciudadanos, etc.); las fuerzas que pelean por la transformación social en un sentido socialista (como pretende ser nuestra organización); y los proyectos políticos híbridos, que combinan la asunción de una buena parte de las demandas populares con la carencia de una perspectiva de superación del capitalismo (Podemos).

En este sentido, y atendiendo al tipo de relaciones establecidas por IU en el último periodo, hay que definir con claridad que el PSOE un partido social-liberal, firmemente comprometido con el orden capitalista y ejecutor de las políticas de austeridad y de empobrecimiento contra las mayorías sociales, y debemos rechazar de forma contundente la participación en cualquier gobierno presidido por el PSOE por encima del nivel municipal. Un gobierno presidido por el PSOE no puede ser calificado como “de izquierdas” o “progresista”.

Es absurdo pensar que se pueda formar un ejecutivo útil para las capas populares a partir de un gobierno de coalición con una fuerza política que está del lado de los poderosos.

Una organización desvinculada de la cultura política hegemónica desde la Transición

Independientemente de las declaraciones tácticas que se puedan adoptar denunciando los incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de planteamientos progresistas presentes en la Constitución de 1978, es imprescindible la denuncia de la ilegitimidad de los orígenes del régimen político actual, nacido de la llamada Transición.

Necesitamos una organización que con toda claridad defienda que el Régimen del 78 no es nocivo para las capas populares por una degradación, sino que lo fue desde su nacimiento, a partir de la misma Transición: un proceso de cambio controlado por las élites reformistas del franquismo, que implicaba la impunidad de graves crímenes contra la humanidad, la restauración de la antidemocrática institución monárquica, la pervivencia fundamental de elementos franquistas en los aparatos judiciales y policiales del Estado, así como la frustración de las aspiraciones populares a unas profundas transformaciones socio-económicas.

Una organización por la nacionalización de la banca y no por la creación de una débil “banca pública”

La defensa del socialismo y de la planificación democrática de la economía debe conllevar inexcusablemente que la organización propugne, como un elemento central de su propuesta económica, la nacionalización de la banca, como medio de que los recursos financieros de la sociedad sean gestionados en interés de las capas populares. Esta propuesta tiene que reflejarse en los programas electorales de la organización, sustituyendo el planteamiento de creación de una “banca pública” escuálida que competiría en condiciones desfavorables con la gran banca privada.

Una organización audaz y no timorata ante los poderosos

Necesitamos una organización audaz en las formas y volcada en las luchas. La forma de las luchas populares debe ser flexible y debemos desterrar completamente cualquier forma de insolidaridad en la organización ante la lucha de la clase trabajadora y por la justicia social, mostrando una actitud timorata y complaciente con el marco de lo “aceptable” para los poderosos. En este sentido no se pueden volver a reproducir en el seno de la organización posiciones vergonzantes ante la combatividad social, como –por ejemplo- las expresadas por importantes dirigentes de IU, ante las acciones del SAT desarrolladas en el verano de 2012 en la cadena de supermecados Mercadona.

IV.- Acumular fuerzas, estrategias de alianzas y programa alternativo para un PROCESO CONSTITUYENTE

Apostamos por la necesidad de abrir un proceso constituyente en nuestro país. No se trata, sin embargo, de plantear los procesos sociales en clave "bipolar" (reforma o proceso constituyente), pues eso está fuera del pensamiento complejo que supone abordar un cambio social en profundidad y también está fuera de un análisis más o menos científico de la realidad histórica en la que estamos...

No podemos participar de la idea de que "la reforma es prolongar, una vez más de espaldas a la plena participación ciudadana, un texto constitucional con grandes carencias"... pues hay campos y ámbitos de la reformas que pueden facilitar el proceso constituyente, por ejemplo, las encaminadas a disminuir las exigencias marcadas para llevar a cabo una reforma de la Constitución actual, porque eso podría abrir las puertas a un proceso actualmente bloqueado, entre otras cosas, por esas exigencias... O las dirigidas a reforzar la articulación social, fomentando la participación social y ciudadana... O las que pueden facilitar la transparencia y el control de la acción política e institucional o los movimientos de capitales...

"La apuesta constituyente requiere la profundización de un amplio proceso de movilización, de empoderamiento de los movimientos sociales, de participación ciudadana y de toma consciente de la palabra por parte de las mayorías sociales",... Esa apuesta ha de venir acompañada de una propuesta que materialice la fuerza instrumental capaz de dinamizar, impulsar, articular, ese proceso de movilización,

Porque, en realidad, para abrir un proceso constituyente de esas características hay dos temas previos:

1.-Es necesario un proceso de acumulación de fuerzas, de orientación transformadora y de izquierdas, que conlleva la reconstrucción de la izquierda plural, la reactivación de los movimientos sociales, la articulación de la sociedad civil... En definitiva una toma de conciencia social amplia y organizada... Y eso, hoy por hoy, aún está muy lejos, y los resultados electorales existentes y próximos lo reiteran...

2.-Es necesaria una estrategia programática participada, coherente con el proceso de movilización y articulación social, que va desde la formulación de unos puntos o propuestas básicas, comunes, a lo que viene en llamarse un "programa de máximos" , donde cabrían alternativas globales al modelo de estado, de sociedad y de gobierno... Sería un error estratégico sacrificar las "conquistas parciales o puntuales" que en cada paso puedan darse, en aras de una gran conquista global y definitiva que abarcara la Constitución y, de camino, incluso el tema europeo...

No debemos pues, confrontar reforma y proceso constituyente, como elección excluyente, aunque eso tenga la virtualidad de "empujar" a una definición y a un posicionamiento más radical y alternativo, porque también puede llevarnos igualmente a lo que en términos freudianos se llama "complejo de impotencia por superpotencia", es decir, "el objetivo es tan amplio y revolucionario que es prácticamente imposible de conseguir, por tanto, para qué voy a gastar energías ahí"... Porque, con la realidad actual, social, económica y cultural, con la fragmentación social existente, la desmovilización social, la subalternidad del movimiento sindical, la división de las izquierdas, el consumismo imperante, la competitividad como base de las relaciones sociales, etc... podemos y debemos plantearnos los horizontes más amplios... pero, junto a esto, es necesario un plan estratégico de alianzas y de articulación-movilización social, de propuestas programáticas, de reformas y de conquistas puntuales y parciales, que nos permita acumular fuerzas para conseguir realmente ese cambio social...

V: Europa: diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo, y en concreto, ante el actual modelo de integración definido en la Europa del euro.

Cualquier proyecto de transformación social, e incluso cualquier alternativa política progresista, ha de partir del hecho del gran fracaso histórico de la Unión Europea, cuyo núcleo fundamental está constituido por la unión monetaria surgida de Maastricht y los Tratados y pactos de estabilidad posteriores.

No hay que recurrir a la tragedia humanitaria de los refugiados para comprender la catástrofe que ha sobrevenido. Con independencia de si nos encontramos ante un gran fraude político promovido por las oligarquías europeas o de un desastre derivado de la degeneración de las intenciones de los impulsores de la integración europea, el caso es que todas las ilusiones que pudieron suscitarse sobre un espacio de paz, justicia, solidaridad, cooperación libertad y democracia están hoy enterradas y en su lugar la desolación y una gran decepción recorren al continente europeo.

Frente al avance del bienestar general pronosticado, una profunda crisis económica y social se extiende por amplios territorios y países de la unión. Frente a la aspiración de eliminar las desigualdades, en todos los países se han agravado hasta extremos inadmisibles las diferencias sociales y las discrepancias entre las economías. La mejora del estado del bienestar ha desaparecido del frontispicio de la Unión para promulgar el tenebroso "abandonad toda esperanza".

Frente al impulso de la democracia, todos los gobiernos están sometidos a los designios de los poderes económicos y las directrices de las instituciones europeas sin control democrático alguno. El debate y la confrontación ideológica han dado paso a situaciones en las que sólo se admiten diferencias mínimas sobre el rigor de la austeridad y la magnitud de los ajustes sociales. Las libertades asimismo y la solidaridad sufren los embates de los gobiernos dedicados a aplacar las luchas sociales y la desesperación en que están atrapados capas sociales cada vez más amplias.

El objetivo irrenunciable de la paz ha sido descartado y Europa está hoy comprometida en conflictos armados, arrastrada por las ilusiones imperialistas de algunos de sus países y la subordinación irresponsable a los diseños geopolíticos de Estados Unidos, cuyos intereses no responden a los valores y necesidades de los pueblos europeos. Incluso sin perder la perspectiva de los acontecimientos bélicos que jalonaron el siglo pasado la historia europea no hay exageración alguna en valorar la situación europea como extremadamente grave, preñada de incógnitas, tensiones, conflictos y rémoras que no pueden encontrar solución en el ambiguo entramado político e institucional en el que ha quedado el proyecto de la integración europea, paralizado, desgarrado, sin norte y sin poder dominar las contradicciones de sus carencias y su concepción neoliberal de la convivencia social.

En estas condiciones, si no hay una determinación política clara sobre lo que hacer para remediar los estragos y superar las secuelas de la crisis europea y cómo afrontar el futuro para evitar marchar junto al precipicio, todos los debates, propuestas, proyectos y alternativas se convierten en ficciones políticamente inútiles. Son ejercicios patéticos e impotentes que eluden la realidad, postergan la hora de la verdad y ocasionan profundas frustraciones susceptibles de alimentar salidas falsas y desconcierto general en la lucha de los oprimidos por su emancipación.

El caso de Grecia ha existido y está demasiado reciente como para que pueda ser obviado y se siga queriendo hacer políticas avanzadas socialmente, o defender programas para recuperar los derechos sociales, sin tener en cuenta la realidad y la crudeza de las exigencias de los poderes económicos. En definitiva, no habrá cambio social sin derribar el muro de las imposiciones de la Troika.

Día tras día se formulan respuestas a los problemas económicos y sociales que implican mayores gastos públicos, y no digamos si se pretenden políticas keynesianas alternativas a la austeridad y los ajustes presupuestarios como necesidad imperiosa para remediar el desempleo masivo. Sin embargo, la burocracia europea no deja de recordar que están pendientes recortes del gasto público para siquiera intentar cumplir los objetivos comprometidos con Bruselas del déficit público. No es legítimo elucubrar en el vacío en favor de las capas sociales débiles y marginadas, como si la mejor voluntad política pudiera exonerar de atenerse a la realidad.

No cabe descartar un agravamiento de la crisis europea por los múltiples desgarramientos potenciales que sufre la Unión europea, entre otras la sobre anunciada crisis financiera o el abandono del Reino Unido, el llamado "Brexit", que pondría fin definitivamente a las magras expectativas de una solución a la crisis. Incluso sin nuevos acontecimientos que ensombrezcan el actual panorama hay que constatar que la crisis económica no está superada y que los sufrimientos y la degradación de las condiciones de vida de una gran parte de la población son el pronóstico más certero y probable. La lucha legítima contra esta evolución es consustancial con las aspiraciones de la izquierda, pero los buenos sentimientos, la exaltación de nuestros valores son inútiles si no se comprende la realidad política sobre la que hay que actuar.

De manera positiva hay que afirmar que los problemas económicos y sociales de la sociedad española sólo pueden ser afrontados y tener solución si se admite que el necesario recuperar la soberanía popular y, en consecuencia, romper con el yugo de la unión monetaria, los requerimientos de las instituciones europeas y los pactos por la austeridad.

La necesidad de revisar en profundidad las relaciones y vínculos con la Unión europea es inexorable para cualquier fuerza política de la izquierda que pretenda realmente cambiar la sociedad. No es posible levantar ninguna política seria y responsable que no contemple poner fin a las ataduras con la unión monetaria, que significan sencillamente que nuestra sociedad ha perdido todos los resortes e instrumentos para afrontar los agobiantes problemas acumulados. Se ha avanzado en un proceso ciego de cesión de la soberanía mientras que ninguna instancia supranacional ha asumido las funciones históricas de los estados para redistribuir solidariamente la riqueza, garantizar el empleo, amortiguar los ciclos económicos y procurar unos niveles de bienestar e igualdad mínimos.

Este es el marco general del problema, pero hay que acabar concluyendo que la necesidad a la que nos referimos tiene una urgencia que no se puede despreciar. Son ya muchos años de crisis, de paro desolador, del retroceso en los derechos laborales, de sobreexplotación de los trabajadores, de degradación de los servicios públicos, de falta de desprotección de capas sociales muy amplias, con los parados particularmente agraviados, con las amenazas sobre las pensiones....

En fin, se ha generado una situación intolerable, irracional e injusta en tantos sentidos que una mínima política consecuente de lucha contra un estado de cosas tan insostenible como lacerante exige ya recuperar la soberanía económica y monetaria, derogar el art. 135 de la constitución y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria

que lo implementa, y romper el pacto fiscal, a través de un proceso movilizador de empoderamiento de la ciudadanía.

Hay que impedir, sin más dilación, que los poderes económicos y la burocracia europea, en nombre de una Unión europea fracasada y descompuesta, siga aplastando y atormentando a los pueblos del estado español.

(Adhesión a la ponencia de Julio Anguita, Albert Escofet, Javier Bernad, Manuel Colomer Lluch, Santiago Fernández Vecilla, Ramón Franquesa, Margarita Gonzalez-Jubete, Pedro Montes, Gumer Pardo i Peiro, Clara Rivas, y Diosdado Toledano).

La construcción de un nuevo modelo de Europa debe hacerse de forma transversal, a través de la clase trabajadora de todo el continente, embarcándonos en aunar luchas que se llevan a cabo contra las oligarquías europeas por parte de sindicatos, colectivos, movimientos sociales, y partidos de la izquierda. Trabajar en la conformación de un frente amplio. Como ha señalado Marina Albiol, no se trata de una lucha entre países, se trata de una lucha de clases, y las trabajadoras y trabajadores de Europa tenemos la obligación moral, histórica e ineludible de derribar el sistema, y propiciar la construcción de un nuevo modelo de Unión Europea, rupturista con el actual, y el momento es ahora.

VI. MODELO TERRITORIAL

Partimos del fracaso absoluto del diseño territorial forjado en la Constitución de 1978, que ha creado un estado de las autonomías insuficiente, que no da respuesta a las necesidades de reconocimiento de la identidad nacional de los territorios que conforman actualmente España. Pese a que hubo intentos de que dicho texto reflejase el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, no fue recogido en el mismo, y es una de nuestras asignaturas pendientes, y fuente de fuertes conflictos territoriales y confrontaciones dentro del Estado español.

Asimismo, desde la perspectiva jurídica, por mucho que les pese algunos, el derecho a la autodeterminación fue incorporado al ordenamiento jurídico español cuando se firmó y ratificó el Pacto Institucional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues como establece el art. 96.1 de la Constitución, “los tratados internacionales, válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico”.

Ambos tratados contiene un mismo artículo primero que dice: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural.”

No obstante lo anterior, resulta necesario que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y del derecho a la independencia deben ser fruto de un nuevo proceso constituyente, para el que se precisa una fuerte articulación social que permita cambiar la correlación de fuerzas actual.

Planteamos la necesidad de una nueva redefinición del modelo territorial de Estado, basado en un modelo confederal, con expreso reconocimiento de los derechos de autodeterminación e independencia, en el que cualquiera de los Estados que lo compongan conserve su propia Soberanía, teniendo la facultad de apartarse de la confederación en el momento que lo considere oportuno.